



Asamblea General

Distr. general
10 de agosto de 2021
Español
Original: ruso

Septuagésimo quinto período de sesiones

Tema 112 del programa

**Lucha contra la utilización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones con fines delictivos**

Carta de fecha 30 de julio de 2021 dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir adjunto el proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer que se distribuya la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con el tema 112 del programa.

(Firmado) Dmitry Polyanskiy
Encargado de Negocios interino



**Anexo de la carta de fecha 30 de julio de 2021 dirigida al
Secretario General por el Encargado de Negocios interino
de la Misión Permanente de la Federación de Rusia ante
las Naciones Unidas**

**Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra
la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones con fines delictivos**

Índice

	<i>Página</i>
Preámbulo	3
I. Disposiciones generales	4
II. Tipificación, penalización y aplicación de la ley	6
Sección 1: Atribución de responsabilidad	6
Sección 2: Penalización y aplicación de la ley	13
III. Medidas para combatir la delincuencia y otros actos ilícitos en el espacio cibernético ...	19
IV. Cooperación internacional	21
Sección 1: Extradición, asistencia jurídica mutua y cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley	21
Sección 2: Recuperación de activos	33
V. Asistencia técnica y formación	38
VI. Mecanismos de aplicación de la Convención	40
VII. Disposiciones finales	42
Anexo	46

Preámbulo

Los Estados parte en la presente Convención,

Convencidos de que el espacio cibernético debe construirse estrictamente de acuerdo con los principios y las normas fundamentales del derecho internacional, incluidos los principios de respeto de los derechos humanos y las libertades y la solución pacífica de las controversias,

Teniendo presente que cada Estado es soberano y ejerce su jurisdicción sobre el espacio cibernético dentro de su territorio de conformidad con su legislación interna,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que para la estabilidad y la seguridad de las sociedades plantean los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, los cuales socavan las instituciones democráticas, los valores y la justicia y perjudican el desarrollo sostenible y el estado de derecho,

Preocupados también por el hecho de que la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos crea oportunidades para la realización de otras formas de actividad delictiva, como los ataques informáticos a infraestructuras vitales, el espionaje informático, la explotación sexual de menores en línea, el terrorismo, el fraude, el robo de identidad y el blanqueo de dinero,

Preocupados además por el número cada vez mayor de delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones relacionados con grandes cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad social y política y el desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones son un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, por lo que es esencial la cooperación internacional para prevenirlos y combatirlos,

Convencidos también de la necesidad de que se preste asistencia técnica en la lucha contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la cual desempeña un papel importante en el aumento de la capacidad de los Estados para prevenir eficazmente esos delitos y fortalecer la seguridad de la información,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones son responsabilidad de todos los Estados y que, para ser eficaces en sus esfuerzos en esa dirección, los Estados deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de asociaciones público-privadas, empresas, actores y entidades no pertenecientes al sector público, como la sociedad civil, por cuanto que la seguridad global de todo el espacio cibernético depende de los esfuerzos de cada Estado,

Resueltos a prevenir, detectar y disuadir más eficazmente las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente como consecuencia de la comisión de delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y a fortalecer la cooperación internacional en la adopción de medidas para la recuperación de activos,

Teniendo presente también los principios de justicia y de igualdad ante la ley y la necesidad de promover una cultura pública que rechace los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones,

Teniendo en cuenta la resolución 74/247 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de diciembre de 2019, relativa a la lucha contra la utilización con fines delictivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en virtud de la cual se estableció un comité intergubernamental especial de expertos de composición abierta para que elaborara una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización con fines delictivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones,

Hemos acordado lo siguiente:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objetivos

La presente Convención tiene por objeto:

Promover y reforzar las medidas para prevenir y combatir eficazmente los delitos y otros actos ilícitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

Prevenir los actos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones y prevenir los abusos en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tipificando como delitos los actos contemplados en la presente Convención y proporcionando poderes suficientes para combatir eficazmente dichos delitos y otros actos ilícitos, facilitando la detección, la investigación y el enjuiciamiento de dichos actos tanto a nivel nacional como internacional y elaborando acuerdos de cooperación internacional;

Aumentar y promover la cooperación internacional, incluso en el contexto de la formación y la prestación de asistencia técnica para prevenir y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

La presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, detección, supresión, investigación y enjuiciamiento de los delitos y otros actos ilícitos tipificados con arreglo a los artículos 6 a 29 de la presente Convención, así como a la aplicación de medidas para hacer frente a las consecuencias de dichos actos, incluida la suspensión de las transacciones relativas a los bienes adquiridos mediante la comisión de cualquier delito y otros actos ilícitos tipificados con arreglo a la presente Convención, y al embargo, el decomiso y la devolución de los ingresos provenientes de esos delitos.

A efectos de la aplicación de la presente Convención, salvo que se disponga lo contrario, no es necesario que se produzcan daños materiales como consecuencia de la comisión de los delitos y demás actos ilícitos previstos en la misma.

Artículo 3

Protección de la soberanía

1. Los Estados parte cumplirán sus obligaciones en virtud de la presente Convención de conformidad con los principios de soberanía de los Estados, igualdad soberana de los Estados y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

2. La presente Convención no facultará a las autoridades competentes de ningún Estado parte a ejercer en el territorio de otro Estado parte la jurisdicción y las funciones que sean de la competencia exclusiva de las autoridades de ese otro Estado de conformidad con su propia legislación interna, salvo disposición en contrario de la presente Convención.

Artículo 4

Términos y definiciones

A los efectos de la presente Convención:

- a) Por “embargo de bienes” se entenderá la prohibición temporal de la transferencia, la conversión, la enajenación o el traslado de bienes o la asunción temporal de la custodia o el control de dichos bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
- b) Por “botnet” o computadora zombi se entenderá dos o más dispositivos de tecnologías de la información y las comunicaciones en los que se instalan programas maliciosos, gestionados de forma centralizada y a escondidas de los usuarios;
- c) Por “programa malicioso” se entenderá un programa que tenga como propiedad la capacidad de modificar, destruir, copiar o bloquear sin autorización cualquier tipo de información o de neutralizar la acción de los medios de protección de la información digital;
- d) Por “pornografía infantil” se entenderá lo establecido en el artículo 2 c) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000;
- e) Por “producto del delito” se entenderá cualquier bien derivado u obtenido, directa o indirectamente, como resultado de la comisión de un delito u otro acto ilícito previsto en la presente Convención, así como cualquier excedente u otro beneficio derivado de dicho producto, de los bienes en que se haya transformado o convertido dicho producto o de los bienes a los que se haya añadido dicho producto;
- f) Por “tecnologías de la información y las comunicaciones” se entenderán los procesos y métodos de creación, tratamiento y difusión de la información, así como las formas y medios de aplicarlos;
- g) Por “redes de información y telecomunicaciones” se entenderá el conjunto de equipos de ingeniería destinados a controlar los procesos tecnológicos mediante la tecnología informática y las telecomunicaciones;
- h) Por “bienes” se entenderá cualquier activo, tangible o intangible, mueble o inmueble, expresado en cosas o derechos, entre ellos activos líquidos, ya sea que se encuentren en cuentas bancarias, activos financieros digitales, moneda digital, incluida la criptodivisa, o en documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la titularidad de dichos activos o parte de ellos;
- i) Por “información” se entenderá cualquier información (mensajes, datos), independientemente de la forma en que se presente;
- j) Por “decomiso” se entenderá la incautación obligatoria, sin indemnización, de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
- k) Por “ataque informático” se entenderá el impacto deliberado por medio de programas informáticos y herramientas de software o hardware en los sistemas de información o en las redes de información y telecomunicaciones con el fin de

interrumpir y poner fin a su funcionamiento y amenazar la seguridad de la información procesada por dichas instalaciones;

l) Por “información digital” se entenderá la información (datos), independientemente de su forma y características, contenida y procesada en dispositivos, sistemas y redes de información y telecomunicaciones;

m) Por “infraestructura de información crítica” se entenderá el conjunto de instalaciones de infraestructura de información crítica, así como las redes de telecomunicaciones utilizadas para organizar la interacción de las instalaciones de infraestructura de información crítica entre sí;

n) Por “instalaciones de infraestructuras críticas” se entenderán los sistemas de información y las redes de información y comunicaciones de los organismos públicos, así como los sistemas de información y los sistemas de control de procesos automatizados que operan en los sectores de la defensa, la sanidad, la educación, el transporte, las comunicaciones, la energía, el crédito y las finanzas, la energía nuclear y otros ámbitos importantes de la administración pública y la sociedad;

o) Por “proveedor de servicios” se entenderá:

i) Cualquier entidad pública o privada que permita a los usuarios de sus servicios intercambiar información mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones; o

ii) Cualquier otra entidad que procese o almacene información electrónicamente en nombre de la entidad mencionada en el párrafo i) o los usuarios de los servicios de dicha entidad;

p) Por “parámetros técnicos del tráfico” se entenderá cualquier información en formato electrónico (distinta del contenido de los datos que se transmiten) relativa a la transmisión de datos mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones y que indique, entre otras cosas, el origen de la transmisión de datos, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño, la duración y el tipo de servicio de red de que se trate;

q) Por “dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones” se entenderá cualquier conjunto (complejo) de medios técnicos utilizados y concebidos para el tratamiento, el almacenamiento y la transmisión automáticos de información en formato electrónico;

r) Por “prueba electrónica” se entenderá cualquier información probatoria almacenada o transmitida en formato digital (en un soporte electrónico).

La noción de “daño sustancial” se definirá de conformidad con la legislación interna del Estado parte requerido.

Capítulo II

Tipificación, penalización y aplicación de la ley

Sección 1

Atribución de responsabilidad

Artículo 5

Atribución de responsabilidad

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna las conductas enunciadas en los artículos 6, 7, 9 a 12, 14 a 17, 19 a 20, 22 a 26 y 28 de la presente

Convención, aplicando para ello las sanciones penales y de otra índole, incluida la pena de prisión, que correspondan a la peligrosidad del acto concreto y a la cuantía del daño causado.

Artículo 6

Acceso no autorizado a la información digital

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna el acceso ilícito deliberado a información digital que tenga como resultado que dicha información se destruya, se bloquee, se modifique o sea copiada.

Artículo 7

Interceptación ilícita

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la interceptación deliberada de información digital realizada sin los derechos correspondientes y en violación de las normas, incluida la utilización de medios técnicos de interceptación de parámetros técnicos del tráfico y de datos procesados mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones y no destinados a su utilización pública.

Artículo 8

Interferencia ilícita en la información digital

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna la destrucción, la eliminación, la alteración, el bloqueo, la modificación o la reproducción deliberados de información digital.

Artículo 9

Interrupción de las redes de información y comunicaciones

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna todo acto ilícito deliberado destinado a perturbar el funcionamiento de las redes de información y comunicaciones que produzca o amenace con producir graves consecuencias.

Artículo 10

Creación, utilización y difusión de programas maliciosos

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la creación deliberada, así como la adaptación, la utilización y la difusión de programas maliciosos destinados a la destrucción, el bloqueo, la modificación, la reproducción y la distribución de información digital o la neutralización de la seguridad de la misma sin autorización, excepto cuando se lleven a cabo en el marco de investigaciones legítimas.
2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna el establecimiento o la utilización de botnets con el fin de cometer cualquiera de los actos enunciados en los artículos 6 a 12 y 14 de la presente Convención.

Artículo 11**Interferencia ilícita en infraestructuras de información críticas**

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la creación, difusión y utilización deliberadas de programas informáticos u otra información digital concebidos con la intención de afectar indebidamente a infraestructuras de información críticas, en particular mediante la destrucción, el bloqueo, la modificación y la reproducción de la información contenida en ellos, o la neutralización de los medios de protección de la información.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la infracción de las normas de almacenamiento, procesamiento o transmisión de la información digital protegida contenida en infraestructuras de información críticas o de los sistemas de información y las redes de información y comunicaciones relacionados con la infraestructura de información crítica, o de las normas de acceso a los mismos, si ha causado daños a la infraestructura de información crítica

Artículo 12**Acceso no autorizado a datos personales**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna el acceso no autorizado a los datos personales con el fin de destruirlos, modificarlos, copiarlos o difundirlos.

Artículo 13**Tráfico ilícito de dispositivos**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito de conformidad con su legislación interna la fabricación, la venta, la adquisición para su utilización, importación, y exportación y otras formas que faciliten la utilización de dispositivos diseñados o adaptados principalmente para cometer cualquiera de los delitos enunciados en los artículos 6 a 12 de la presente Convención.

Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán cuando la fabricación, la venta, la adquisición para su utilización, importación, exportación u otras formas que faciliten la utilización de dispositivos estén relacionadas, por ejemplo, con la realización de pruebas autorizadas o la protección de sistemas informáticos.

Artículo 14**Robo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones**

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna el robo de bienes o la adquisición ilícita de títulos de propiedad, incluso mediante fraude, destruyendo, bloqueando, modificando o copiando información digital, o interfiriendo de otro modo en el funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Cada Estado parte podrá reservarse el derecho de tratar el robo o la adquisición ilícita de títulos de propiedad, incluso mediante fraude, a través de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una circunstancia agravante en la comisión de robo, de conformidad con su legislación interna.

Artículo 15

Delitos relacionados con la producción y la circulación de materiales u objetos con representaciones pornográficas de menores, cometidos mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna, cuando se cometan deliberada e ilícitamente, los siguientes actos:

- a) Producción de pornografía infantil para su distribución a través de las redes de información y comunicaciones, en particular vía Internet;
- b) Oferta o facilitación de pornografía infantil a través de las redes de información y comunicaciones, en particular vía Internet;
- c) Distribución, transmisión, exhibición pública o promoción de la pornografía infantil a través de las redes de información y comunicaciones, en particular vía Internet;
- d) Adquisición de pornografía infantil mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para uno mismo o para otra persona;
- e) Posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un soporte digital electrónico.

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, por “pornografía infantil” se entenderá todo material pornográfico que represente:

- a) La participación de menores en actos sexuales explícitos;
- b) La participación de personas que parezcan ser menores de edad en actos sexuales explícitos;
- c) Imágenes realistas de la participación de menores en actos sexuales explícitos.

A los efectos del presente artículo, por “menores” se entenderá toda persona menor de 18 años. Sin embargo, cualquiera de las partes en la Convención podrá establecer límites de edad más bajos, si bien en ningún caso por debajo de los 16 años.

Artículo 16

Incitación o coacción al suicidio

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la incitación o la coacción al suicidio, incluso de menores, cometidas mediante la influencia psicológica y de otro tipo en las redes de información y comunicaciones, en particular vía Internet.

Artículo 17

Delitos relacionados con la participación de menores en la comisión de actos ilícitos peligrosos para su vida o su salud

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la participación de menores, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en actos ilícitos que pongan en peligro su vida, distintos de los previstos en el artículo 16 de la presente Convención.

Artículo 18**Creación y utilización de información digital para engañar al usuario**

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna la creación y utilización ilícitas deliberadas de información digital que sea confusamente similar a la información ya conocida por el usuario y que cause un daño sustancial.

2. Cada Estado parte podrá reservarse el derecho de considerar tales actos como delictivos si se cometen junto con otros delitos previstos en la legislación interna del Estado parte o si se albergaba la intención de cometerlos.

Artículo 19**Incitación a actividades subversivas o armadas**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna toda exhortación, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a cometer actos subversivos o armados que tengan por objeto el derrocamiento por la violencia del sistema de cualquier otro Estado.

Artículo 20**Delitos relacionados con actividades terroristas**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna toda exhortación, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a la inducción, el reclutamiento u otra forma de involucración con fines terroristas, la propaganda y la justificación del terrorismo y la recaudación o el suministro de fondos para su financiación.

Artículo 21**Delitos relacionados con actividades extremistas**

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna la difusión, la promoción o la justificación de actos ilícitos motivados por el odio o la enemistad política, ideológica, social, racial, nacional o religiosa, o la facilitación del acceso a tales actos, cometidos mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna el menoscabo de toda persona o todo grupo de personas por motivos de raza, nacionalidad, idioma, origen o actitud hacia la religión, cometido mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 22**Delitos relacionados con la distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna el tráfico deliberado de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de los materiales necesarios para su fabricación mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 23**Delitos relacionados con el tráfico ilícito de armas**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna el recurso deliberado, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, del tráfico ilícito de armas, municiones, artefactos explosivos y explosivos.

Artículo 24**Rehabilitación del nazismo y justificación del genocidio o de los crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad**

Cada Estado adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la difusión deliberada, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de material que niegue, respalde o justifique actos que constituyan genocidio o crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad, tal y como se establece en la sentencia del Tribunal Militar Internacional establecido en virtud del Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945.

Artículo 25**Distribución ilícita de medicamentos y productos sanitarios falsificados**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la utilización deliberada de las tecnologías de la información y las comunicaciones para distribuir medicamentos y productos médicos falsificados.

Artículo 26**Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para cometer actos definidos como crímenes en el derecho internacional**

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones para cometer cualquier acto que constituya un delito contemplado en cualquiera de los instrumentos internacionales enumerados en el Anexo de la presente Convención.
2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, todo Estado que no sea Parte en ninguno de los instrumentos enumerados en el Anexo de la presente Convención podrá declarar que, en la aplicación de la presente Convención a ese Estado parte, el instrumento de que se trate se considerará no incluido en dicho Anexo. Dicha declaración dejará de tener efecto tan pronto como el instrumento entre en vigor para ese Estado parte, que lo notificará al depositario.
3. Cuando un Estado parte deje de ser parte en un instrumento enumerado en el Anexo de la presente Convención, podrá hacer una declaración con respecto al instrumento o los instrumentos de que se trate, según lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 27**Infracción de los derechos de autor y derechos afines mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones**

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito u otro acto ilícito en su legislación interna las violaciones de los derechos de autor y derechos conexos definidos en la legislación de ese Estado parte, cuando esos actos se cometan deliberadamente utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la utilización ilícita de

programas de sistemas informáticos y bases de datos sujetos a derechos de autor y atribución.

Artículo 28

Complicidad en un delito, preparación de un delito y tentativa de comisión de un delito

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la preparación y la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo a las disposiciones de la presente Convención.
2. Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su legislación interna la fabricación o adaptación por una persona de instrumentos u otros medios para cometer un delito, el reclutamiento de cómplices para cometer un delito, la conspiración para cometer un delito u otra forma de habilitación deliberada de un delito previsto en la presente Convención, siempre y cuando el delito no se haya consumado en virtud de circunstancias ajenas a la voluntad de esa persona.
3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias de conformidad con su legislación interna para establecer la responsabilidad, además de los autores directos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, del organizador, el instigador o el cómplice involucrados, así como para aumentar la responsabilidad por los delitos cometidos en grupo, incluidos grupos organizados y asociaciones delictivas.

Artículo 29

Otros actos ilícitos

La presente Convención no habrá de ser obstáculo para que un Estado parte reconozca como delito cualquier otro acto ilícito cometido deliberadamente mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones que haya causado un daño sustancial.

Artículo 30

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y otras medidas jurídicas que sean necesarias para que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de los delitos y otros actos ilícitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cuando esos actos sean cometidos en su provecho por cualquier persona física que actúe a título individual o como miembro de un órgano de la persona jurídica de que se trate y que ocupe un cargo directivo en esa persona jurídica por los siguientes motivos:
 - a) La autorización para representar a la persona jurídica en cuestión;
 - b) El derecho a adoptar decisiones en nombre de esa persona jurídica;
 - c) El derecho a ejercer el control en el seno de esa persona jurídica.
2. Además de los casos contemplados en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la falta de dirección o control por parte de una persona física mencionada en el párrafo 1 haga posible que una persona física que actúe bajo su autoridad cometa en beneficio de esa persona jurídica un delito u otro acto ilícito contemplado en las disposiciones de la presente Convención.

3. Con sujeción a los principios jurídicos de cada Estado parte, la responsabilidad de una persona jurídica puede ser penal, civil o administrativa. Cada Estado parte se asegurará de que las personas jurídicas consideradas responsables sean objeto de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, incluidas las financieras.

4. La responsabilidad de las personas jurídicas no excluye la responsabilidad de las personas físicas que hayan cometido un delito u otro acto ilícito.

Sección 2

Penalización y aplicación de la ley

Artículo 31

Ámbito de aplicación del procedimiento

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para establecer las facultades y los procedimientos previstos en las disposiciones de la presente sección para la prevención, la detección, la supresión, el descubrimiento, la investigación y el enjuiciamiento de delitos y otros actos ilícitos.

2. Salvo que se disponga otra cosa en el artículo 33 de la presente Convención, cada Estado parte aplicará las facultades y los procedimientos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo con respecto a:

a) Los delitos y otros actos ilícitos previstos en los artículos 6 a 29 de la presente Convención;

b) Otros delitos y otros actos ilícitos cometidos mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones;

c) La reunión de pruebas, incluidas las electrónicas, de la comisión de delitos y otros actos ilícitos.

3. a) Cada Estado parte podrá formular una reserva en el sentido de hacer valer su derecho a aplicar las medidas previstas en el artículo 38 de la presente Convención únicamente a los delitos o las categorías de delitos a que se refiera esa reserva, siempre que el alcance de esos delitos o categorías de delitos no sea más limitado que el de los delitos a los que aplica las medidas previstas en el artículo 33 de la presente Convención. Cada Estado parte considerará la posibilidad de limitar el alcance de dicha reserva para hacer el uso más ampliamente posible de las medidas previstas en el artículo 38 de la presente Convención;

b) Cuando un Estado parte, debido a las limitaciones impuestas por la legislación interna vigente en el momento de la adopción de la presente Convención, no pueda aplicar las medidas previstas en los artículos 33 y 38 de la presente Convención a la información transmitida a través de un sistema de información del proveedor de servicios que:

i) Se utiliza para atender a un grupo específico de usuarios; y

ii) No utiliza una red de información y telecomunicaciones, ni está conectado a otros sistemas de información;

ese Estado parte podrá reservarse el derecho de no aplicar a dicha transmisión las medidas indicadas.

Artículo 32

Condiciones y salvaguardias

1. Cada Estado parte velará por que el establecimiento, la ejecución y la aplicación de las facultades y los procedimientos previstos en la presente sección estén sujetos

a las condiciones y salvaguardias previstas en su legislación interna para asegurar la adecuada protección de los derechos humanos y las libertades, incluidas las derivadas de las obligaciones que el Estado parte haya contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables.

2. Dichas condiciones y salvaguardias incluirán, entre otras cosas, la supervisión judicial u otro tipo de supervisión independiente, los motivos de elegibilidad, las limitaciones del alcance y la duración de dichos poderes o procedimientos, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

3. En la medida en que sea de interés público, en particular la administración de justicia, el Estado parte considerará las consecuencias de los poderes y procedimientos de esta sección para los derechos, los intereses legítimos y las responsabilidades de terceros.

Artículo 33

Recogida de información transmitida mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole para combatir los delitos enunciados en la presente Convención y establecidos de conformidad con su legislación interna que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes a:

a) Reunir o registrar, por medios técnicos, la información transmitida utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones en el territorio de ese Estado parte; y

b) Obligar al proveedor de servicios, dentro de los límites de su capacidad técnica, a:

i) Reunir o registrar, utilizando medios técnicos dentro del territorio de ese Estado parte, información en formato electrónico que incorpore datos sobre el contenido de las comunicaciones transmitidas a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones; o

ii) Cooperar con las autoridades competentes de ese Estado parte y ayudarlas a reunir o registrar en tiempo real información en formato electrónico, incluidos los datos sobre el contenido de las comunicaciones transmitidas por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el territorio de ese Estado parte.

2. Si un Estado parte, debido a principios bien establecidos de su ordenamiento jurídico interno, no puede adoptar las medidas previstas en el párrafo 1 a) del presente artículo, podrá adoptar en su lugar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para garantizar la reunión o el registro en tiempo real de información en formato electrónico, incluidos los datos sobre el contenido de las comunicaciones transmitidas utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones en su territorio por medios técnicos dentro de dicho territorio.

3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para obligar al prestador de servicios a mantener la confidencialidad del ejercicio de cualquiera de las facultades y actos previstos en el presente artículo y de cualquier información al respecto.

4. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

Artículo 34

Aseguramiento expedito de la información acumulada en formato electrónico

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan emitir órdenes o instrucciones apropiadas o de manera similar para salvaguardar con prontitud información digital electrónica específica, incluidos los parámetros técnicos del tráfico, en particular cuando haya motivos para creer que los datos son especialmente vulnerables a la destrucción, el bloqueo, la reproducción o la modificación, incluso como resultado de la expiración de su período de conservación en virtud de la legislación nacional o de las condiciones de servicio del proveedor.
2. Si un Estado parte aplica las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo ordenando a una persona (incluida una persona jurídica) que salvaguarde determinada información almacenada que esté en su poder o bajo su control, ese Estado parte adoptará las medidas legislativas y otras medidas jurídicas que sean necesarias para exigir a esa persona que conserve la información y garantice su integridad durante el período necesario, pero sin exceder el tiempo que pueda prescribir la legislación interna de ese Estado parte, a fin de que las autoridades competentes puedan obtener esos datos. Un Estado parte puede prever la posibilidad de prorrogar dicha orden.
3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para obligar a la persona encargada de salvaguardar la información a que mantenga la confidencialidad de esos procedimientos durante el tiempo que exija su legislación interna.
4. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

Artículo 35

Aseguramiento expedito y divulgación parcial de datos sobre los parámetros técnicos del tráfico

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias con respecto a los parámetros técnicos del tráfico que deben salvaguardarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la presente Convención:
 - a) Garantizar que el pronto aseguramiento de los parámetros técnicos del tráfico sea posible independientemente del número de proveedores de servicios que participen en la transmisión de esa información; y
 - b) Garantizar la pronta divulgación a las autoridades competentes de ese Estado parte de parámetros técnicos del tráfico suficientes para que el Estado parte de que se trate pueda identificar a los proveedores de servicios y la vía por la que se transmitió dicha información.
2. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

Artículo 36

Orden de proporcionar información

1. Para los fines previstos en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención, cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para emitir una orden dirigida a:

a) Una persona en el territorio de ese Estado parte para que proporcione información digital electrónica específica que esté en posesión o bajo control de esa persona;

b) Un proveedor de servicios que ofrezca sus servicios en el territorio de ese Estado parte para que proporcione información sobre sus abonados que estén en posesión o bajo el control de dicho proveedor de servicios.

2. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

3. A los efectos del presente artículo, se entenderá por “información sobre los abonados” cualquier información de que disponga un proveedor de servicios acerca de sus abonados, distinta de los parámetros técnicos del tráfico o del contenido de la información, con cuya ayuda se pueda determinar:

a) El tipo de servicio de información y comunicaciones utilizado, las disposiciones técnicas aprobadas a tal efecto y el período de prestación del servicio;

b) La identidad del usuario, sus direcciones postales o de otro tipo, sus números de teléfono y otros medios de comunicación, incluidas las direcciones IP, los detalles de sus facturas y los pagos realizados en virtud del acuerdo o contrato de servicios;

c) La ubicación de los equipos de información y telecomunicaciones pertinentes para el acuerdo o su contrato de servicios.

Artículo 37

Requisición e incautación de información almacenada o procesada electrónicamente

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para dotar a sus autoridades competentes de facultades de requisición con miras a obtener acceso en el territorio de ese Estado parte o bajo su jurisdicción a:

a) Los dispositivos de tecnologías de la información y las comunicaciones y la información almacenada en ellos; y

b) Los medios en que se pueda almacenar la información digitalizada que se busca.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para garantizar que, cuando sus autoridades competentes, durante toda requisición iniciada en virtud de las disposiciones del párrafo 1 a) del presente artículo, establezcan que la información objeto de búsqueda se encuentra almacenada en otro dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del territorio de ese Estado parte, dichas autoridades puedan proceder rápidamente a su requisición en ese otro dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones o en los datos que contiene.

3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para dotar a sus autoridades competentes de las facultades de incautar, o asegurar de manera similar, en el territorio o bajo la jurisdicción del Estado parte información en formato electrónico. Esas medidas incluirán, entre otras, las siguientes facultades:

a) Incautar o asegurar de otro modo los dispositivos de tecnologías de la información y las comunicaciones utilizados para almacenar información;

b) Hacer y conservar copias de la información pertinente en formato digital electrónico;

c) Garantizar la integridad de la información pertinente almacenada;

d) Eliminar la información almacenada o procesada en formato digital electrónico en el dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones.

4. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para dotar a sus autoridades competentes de las facultades de ordenar, de conformidad con su legislación interna, a cualquier persona con conocimientos especiales sobre el funcionamiento del sistema de información, de la red de información y de telecomunicaciones o de partes de ella o de las medidas aplicadas para proteger la información a que proporcione la información y la asistencia necesarias para llevar a cabo las acciones contempladas en los párrafos 1 a 3 del presente artículo

5. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

Artículo 38

Recopilación en tiempo real de parámetros técnicos del tráfico

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para dotar a sus autoridades competentes de las facultades de:

a) Recopilar o registrar, por medios técnicos, los parámetros técnicos del tráfico relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el territorio de ese Estado parte; y

b) Obligar a los proveedores de servicios, dentro de los límites de su capacidad técnica, a:

i) Recopilar o registrar, por medios técnicos dentro del territorio de ese Estado parte, los parámetros técnicos del tráfico; o

ii) Cooperar con las autoridades competentes de ese Estado parte y ayudarlas a recopilar o registrar en tiempo real los parámetros técnicos del tráfico relacionados con información específica en el territorio de ese Estado parte.

2. Si un Estado parte, en virtud de los principios firmemente establecidos de su ordenamiento jurídico interno, no puede adoptar las medidas previstas en el párrafo 1 a) del presente artículo, podrá adoptar en su lugar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para garantizar la recopilación o el registro en tiempo real de los parámetros técnicos del tráfico en su territorio por medios técnicos dentro de dicho territorio.

3. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para obligar al proveedor de servicios a respetar la confidencialidad del ejercicio de las facultades previstas en el presente artículo y de cualquier información al respecto.

4. Las facultades y los procedimientos a que se refiere el presente artículo se establecerán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de la presente Convención.

Artículo 39

Jurisdicción

1. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos y otros actos ilícitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cuando dichos delitos se cometan:

- a) En el territorio de ese Estado parte; o
- b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado parte en el momento de cometerse el acto o de una aeronave que esté registrada conforme a las leyes de ese Estado parte en ese momento.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Convención, un Estado parte también podrá establecer su jurisdicción sobre cualesquiera de esos delitos u otros actos ilícitos cuando:

- a) El acto se cometa contra un nacional de ese Estado parte, un apátrida que resida permanentemente en su territorio, una persona jurídica establecida o con un establecimiento permanente en su territorio, una instalación estatal o gubernamental, incluidos los locales de una misión diplomática y una oficina consular de ese Estado parte; o
- b) El acto sea cometido por un nacional de ese Estado parte o un apátrida que tenga su residencia habitual en su territorio; o
- c) El acto se cometa contra ese Estado parte; o
- d) El acto se cometa total o parcialmente fuera del territorio del Estado parte, pero sus efectos en su territorio constituyan un delito o dan lugar a un delito.

3. A los efectos del artículo 47 de la presente Convención, cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado parte no lo extradite por su condición de nacional de dicho Estado o por haberle sido concedido el estatuto de refugiado.

4. Todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente y que no proceda a su extradición estará obligado, en los casos previstos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, sin excepción alguna y con independencia de que el delito se haya cometido o no en el territorio de ese Estado parte, a someter el caso sin mayor dilación a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento de conformidad con la legislación de ese Estado.

5. Si un Estado parte que ejerce su jurisdicción en virtud de los párrafos 1 o 2 del presente artículo ha sido notificado, o ha tenido conocimiento por otros medios, de que otros Estados parte están llevando a cabo una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de la misma conducta, las autoridades competentes de esos Estados parte se consultarán, según proceda, con miras a coordinar sus actuaciones.

6. Sin perjuicio de las normas generales de derecho internacional, la presente Convención no excluye el ejercicio de cualquier jurisdicción penal y administrativa establecida por un Estado parte de conformidad con su legislación interna.

Capítulo III

Medidas para combatir la delincuencia y otros actos ilícitos en el espacio cibernético

Artículo 40

Políticas y prácticas de prevención y lucha contra los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, elaborará y aplicará o mantendrá una política eficaz y coordinada para hacer frente a los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
2. Cada Estado parte se esforzará por desarrollar y promover prácticas eficaces destinadas a prevenir delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
3. Los Estados parte, cuando proceda, de conformidad con los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la elaboración de las medidas mencionadas en el presente artículo y en la promoción de su aplicación.

Artículo 41

Autoridades responsables de la prevención y la lucha contra los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para designar a las autoridades responsables de la prevención y la lucha contra los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y establecer los procedimientos mediante los cuales dichas autoridades interactuarán entre sí.
2. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados parte a elaborar y aplicar medidas específicas para prevenir delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 42

Sector privado

1. Cada Estado parte adoptará medidas, de conformidad con los principios fundamentales de su legislación interna, para prevenir los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector privado, para fortalecer las normas de seguridad de la información en el sector privado y, cuando proceda, para establecer y aplicar sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionales y disuasorias en caso de incumplimiento de dichas medidas.
2. Entre las medidas para alcanzar esos objetivos podrán aplicarse, entre otras, las siguientes:
 - a) Facilitar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley del Estado parte de que se trate y las entidades privadas pertinentes de ese Estado parte;

b) Promover la elaboración de normas y procedimientos destinados a garantizar la seguridad de la información;

c) Facilitar la formación de las autoridades policiales, de investigación, judiciales y fiscales en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 43

Principios y normas de conducta para los proveedores privados de servicios de información y telecomunicaciones

1. Cada proveedor privado (o grupo de proveedores) que preste servicios de información y telecomunicaciones ubicado en el territorio de un Estado parte adoptará medidas apropiadas, en la medida de sus posibilidades y de conformidad con la legislación interna de ese Estado, para promover la formulación y la aplicación de principios y normas para el espacio internacional de la información basados en el respeto de los derechos humanos, tal como se establece en los instrumentos fundamentales de las Naciones Unidas.

2. Entre las medidas para alcanzar esos objetivos podrán aplicarse, entre otras, las siguientes:

a) Velar por la cooperación entre los proveedores privados que prestan servicios de información y telecomunicaciones o entre grupos de proveedores;

b) Velar por la cooperación en la elaboración de principios y normas destinados a crear un entorno adecuado para la construcción de una sociedad civilizada como parte integrante del espacio cibernético internacional.

Artículo 44

Sensibilización de la población sobre la prevención del delito cibernético

1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas, en la medida de sus posibilidades y de conformidad con los principios fundamentales de su legislación interna, para promover la participación activa de la sociedad civil en la prevención de delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones y para promover la sensibilización del público sobre la existencia, las causas y la peligrosidad de esos delitos y las amenazas que plantean. Esa participación deberá reforzarse mediante la aplicación de las siguientes medidas:

a) Garantizar el acceso efectivo del público a la información;

b) Llevar a cabo actividades de información pública que contribuyan a crear un clima de tolerancia cero frente a los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a difundir las mejores prácticas;

c) Implementar programas de educación pública en el ámbito de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas apropiadas para garantizar que el público conozca a las autoridades competentes encargadas de hacer frente a los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones a que se refiere la presente Convención y facilitará el acceso a dichas autoridades para la denuncia de cualquier incidente que pueda considerarse como un delito u otro acto ilícito de conformidad con la presente Convención.

Artículo 45**Medidas de protección de testigos**

Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas que sean necesarias para proporcionar una protección eficaz a:

a) Las personas que, de buena fe y por motivos fundados, faciliten información relativa a actos ilícitos con arreglo a los artículos 6 a 28 de la presente Convención o cooperen de otro modo con las autoridades investigadoras o judiciales;

b) Los testigos que presten testimonio sobre actos ilícitos con arreglo a los artículos 6 a 28 de la presente Convención, así como las víctimas;

c) En su caso, los miembros de la familia de las personas mencionadas en los párrafos a) y b) del presente artículo.

Capítulo IV**Cooperación internacional****Sección 1****Extradición, asistencia jurídica mutua y cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley****Artículo 46****Principios generales de la cooperación internacional**

1. Los Estados parte cooperarán en la mayor medida posible, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo y mediante la aplicación de otros tratados internacionales sobre cooperación internacional en materia penal, acuerdos mutuamente convenidos basados en el principio de reciprocidad, así como en la legislación interna, con miras a prevenir, reprimir, detectar, descubrir e investigar los delitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Cuando se exija la doble incriminación en materia de cooperación internacional para determinar que un determinado acto constituye un delito, se considerará cumplida con independencia de que la legislación del Estado parte requerido incluya el delito en la misma categoría de delito o lo describa en términos similares a los del Estado parte requirente, si la conducta que constituye un acto delictivo para el que se solicita la asistencia está tipificada como delito de conformidad con la legislación de ambos Estados parte.

3. Cuando proceda y en consonancia con sus ordenamientos jurídicos internos, los Estados partes se prestarán asistencia mutua en las investigaciones y los procedimientos civiles y administrativos relacionados con actos ilícitos que hayan entrañado la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

4. Ninguno de los delitos enunciados en los artículos 6 a 28 de la presente Convención se considerará entre los Estados parte, a los efectos de la extradición y de la asistencia jurídica en materia penal, incluidos el decomiso y la restitución de los bienes obtenidos por medios delictivos, como un delito político, como un delito conexo a un delito político o como un delito inspirado en motivos políticos. Por lo tanto, una solicitud de extradición y de asistencia jurídica en materia penal, incluidos el registro, la incautación, la confiscación y la devolución de bienes obtenidos por medios delictivos, en relación con dicho delito, no podrá ser rechazada por el solo hecho de tratarse de un delito político, un delito relacionado con un delito político o un delito cometido por motivos políticos.

Para formular y responder a las solicitudes formuladas en virtud de la presente Convención, se podrán utilizar los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en casos urgentes y cuando se llegue a un acuerdo entre los Estados parte requerientes y requeridos.

5. Cada Estado parte tendrá el mismo derecho a la protección de sus recursos de información y de sus infraestructuras de información críticas contra la utilización indebida y la interferencia no autorizada, incluidos los ataques informáticos contra ellos.

Artículo 47 **Extradición**

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando la persona cuya extradición se solicita se encuentre en el territorio del Estado parte requerido, siempre que con arreglo a la legislación interna tanto del Estado parte requeriente como del Estado parte requerido la conducta por la que se solicita la extradición sea punible como mínimo con pena de privación de libertad por un año o con una pena más severa.

2. Los delitos enunciados en los artículos 6 a 28 de la presente Convención se considerarán como delitos que dan lugar a extradición con arreglo a todo tratado de extradición existente entre los Estados parte. Los Estados parte se comprometen a incluir esos delitos como delitos que dan lugar a extradición en cualquier tratado de extradición que se celebre entre ellos. El Estado parte cuya legislación interna lo permita, cuando utilice la presente Convención como base para la extradición, no habrá de considerar que ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención constituye un delito político.

3. Si la solicitud de extradición se refiere a varios delitos distintos, de los cuales al menos uno da lugar a extradición con arreglo al presente artículo y otros no dan lugar a extradición debido a las penas aplicables, pero se consideran delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado parte requerido podrá aplicar el presente artículo también con respecto a esos delitos.

4. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que no ha celebrado un tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica para la extradición respecto de cualquier delito al que se aplique el presente artículo.

5. Todo Estado parte que condicione la extradición a la existencia de un tratado:

a) Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la presente Convención, deberá informar al Secretario General de las Naciones Unidas si se servirá de la presente Convención como base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados parte en la misma; y

b) Si no se sirve de la presente Convención como base jurídica para la cooperación en materia de extradición, tratará, cuando proceda, de celebrar tratados de extradición con otros Estados parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.

6. Los Estados parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación interna del Estado parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre

otras, las condiciones relativas al requisito de pena mínima para la extradición y los motivos por los que el Estado parte requerido puede denegar la extradición.

8. Con respecto a cualquier delito al que se aplique el presente artículo, los Estados parte procurarán, con sujeción a su legislación interna, agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes, si los hubiere.

9. El Estado parte requerido podrá negarse a extraditar a una persona si dicha extradición perjudica su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales.

10. Con sujeción a las disposiciones de su legislación interna y de sus tratados de extradición, el Estado parte requerido, cuando tenga la certeza de que las circunstancias lo justifican y son urgentes, y a petición del Estado parte requirente, podrá proceder a la detención de la persona cuya extradición se solicita en su territorio o adoptar otras medidas apropiadas para asegurar su presencia en los procedimientos de extradición, incluida la entrega de la persona extraditada al Estado parte requirente.

11. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no extradita a esa persona respecto de un delito al que se aplique el presente artículo, estará obligado, sin excepción, a petición del Estado parte que solicite la extradición, a someter el caso sin demoras indebidas a sus autoridades competentes a efectos de su enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus procedimientos de la misma manera que en el caso de cualquier otro delito de naturaleza grave según la legislación interna de ese Estado parte. Los Estados parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a las cuestiones de procedimiento y de prueba, a fin de garantizar la eficacia del enjuiciamiento.

12. Cuando un Estado parte esté autorizado en virtud de su legislación interna a extraditar o entregar de otro modo a uno de sus nacionales solo a condición de que la persona sea devuelta a ese Estado parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o procedimiento por el que se solicitó la extradición o la entrega de la persona y ese Estado parte y el Estado parte que solicita la extradición de la persona hayan acordado los arreglos y otras condiciones que consideren apropiadas, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Se garantizará a toda persona respecto de la cual se lleve a cabo un procedimiento en relación con cualquier delito al que se aplique el presente artículo un trato justo en todas las fases del procedimiento, incluido el disfrute de todos los derechos y garantías previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la legislación interna del Estado parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de imponer una obligación de extraditar si el Estado parte requerido tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición se ha formulado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, idioma, religión, nacionalidad u origen étnico, o que el cumplimiento de la solicitud podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esas razones.

15. Antes de denegar la extradición, el Estado parte requerido consultará, cuando proceda, con el Estado parte requirente para darle suficiente oportunidad de presentar sus puntos de vista y proporcionar información pertinente a los hechos enunciados en su solicitud.

16. Los Estados parte se esforzarán por celebrar tratados o acuerdos bilaterales y multilaterales para aplicar o mejorar la eficacia de la extradición.

17. Cada Estado parte designará una autoridad central encargada de recibir las solicitudes de extradición y ejecutarlas. Se notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la autoridad central designada a tal efecto cuando un Estado parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la presente Convención.

Artículo 48

Non bis in idem

1. No se concederá la extradición si las autoridades competentes del Estado parte requerido han adoptado una decisión definitiva contra la persona cuya extradición se solicita con respecto al delito por el que se solicita. La extradición puede ser denegada si las autoridades competentes del Estado parte requerido han decidido no procesar o suspender el procesamiento por el mismo delito.

2. No se concederá la extradición de una persona que haya sido juzgada definitivamente en un tercer Estado parte en la Convención respecto del delito por el que se solicita la extradición:

- a) Si la citada sentencia le exime de responsabilidad;
- b) Si la pena de prisión u otra pena que se le imponga:
 - i) Se ha aplicado en su totalidad;
 - ii) Ha sido objeto de un indulto o amnistía total o parcial que no se ha aplicado;
- c) Si el tribunal ha condenado al infractor sin imponerle sanciones.

3. No obstante, en los casos contemplados en el párrafo 2, podrá adoptarse una decisión de extradición:

- a) Si el delito por el que se dictó la sentencia se ha cometido contra una persona, institución o cualquier agente que sea funcionario público del Estado requirente;
- b) Si la persona contra la que se ha dictado la sentencia es un funcionario público del Estado requirente;
- c) Si la infracción respecto de la cual se dictó la sentencia se ha cometido total o parcialmente en el territorio del Estado requirente o en un lugar considerado como su territorio.

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 no se oponen a la aplicación de normas internas más amplias relativas a la aplicación del principio *non bis in idem* con respecto a las sentencias penales dictadas en otro Estado.

Artículo 49

Asistencia jurídica mutua

1. Los Estados parte se prestarán asistencia jurídica mutua para investigar, perseguir o juzgar los delitos y otros actos ilícitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para hacer efectivas las obligaciones establecidas en los artículos 55, 56, 59 a 62, 66 de la presente Convención. Cada Estado parte considerará también la posibilidad de aumentar (ampliar o suspender) el plazo de prescripción a fin de prevenir la evasión de la responsabilidad.

3. Salvo que se disponga otra cosa en los artículos del presente capítulo, la asistencia jurídica mutua se prestará con sujeción a las condiciones previstas por la

legislación interna del Estado parte requerido o por las disposiciones de los acuerdos de asistencia jurídica mutua aplicables, incluidos los motivos por los que el Estado parte requerido puede denegar total o parcialmente la cooperación.

4. Cada Estado parte designará una autoridad central encargada de recibir y ejecutar las solicitudes de asistencia jurídica mutua. Se notificará al Secretario General de las Naciones Unidas la autoridad central designada a tal efecto cuando el Estado parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a la presente Convención.

Artículo 50

Asistencia mutua en caso de emergencia

1. A efectos del presente artículo, se entiende por emergencia una situación en la que existe un riesgo importante e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona.

2. Cada Estado parte podrá solicitar asistencia mutua a otro Estado parte lo antes posible si cree que existe una emergencia. Una solicitud en virtud del presente artículo incluirá, entre otros contenidos necesarios, una descripción de los hechos que indican que existe una emergencia y la relación de la asistencia solicitada con la misma.

3. El Estado parte requerido aceptará dicha solicitud por vía electrónica. Sin embargo, podrá exigir un nivel adecuado de seguridad y autenticación antes de aceptar la solicitud.

4. El Estado parte requerido podrá, tan pronto como sea posible, solicitar información adicional para evaluar la solicitud. El Estado parte requirente proporcionará dicha información adicional lo antes posible.

5. Una vez comprobado que existe una emergencia y que se cumplen los demás requisitos para la asistencia mutua, el Estado parte requerido responderá a la solicitud lo antes posible.

6. Cada Estado parte velará por que un funcionario de su autoridad competente que responda a las solicitudes de asistencia mutua de conformidad con los artículos 49 y 52 de la presente Convención esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a fin de responder a una solicitud formulada de conformidad con el presente artículo.

7. Las autoridades competentes responsables de la asistencia mutua del Estado parte requirente y del Estado parte requerido podrán acordar que los resultados de una solicitud presentada en virtud del presente artículo, o una copia anticipada de la misma, se faciliten al Estado parte requirente mediante un canal de comunicación alternativo al utilizado normalmente para solicitar asistencia jurídica.

8. En caso de emergencia, las autoridades competentes del Estado parte requirente podrán presentar solicitudes directamente a las autoridades competentes del Estado parte requerido o a través de INTERPOL o de la red 24/7, de conformidad con el artículo 66 de la presente Convención. En cualquiera de esos casos, se enviará simultáneamente una copia de la solicitud a la autoridad central del Estado parte requerido a través de la autoridad central del Estado parte requirente. Si la solicitud se envía directamente a la autoridad central del Estado parte requerido y ésta no es la autoridad competente para ejecutar la solicitud, transmitirá la solicitud a la autoridad competente e informará a la autoridad central del Estado parte requirente de la transmisión de dicha solicitud.

Cada Estado parte, en el momento de la firma de la presente Convención o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá

informar al Secretario General de las Naciones Unidas de que, por razones de eficacia, las solicitudes formuladas con arreglo al presente párrafo deberán dirigirse únicamente a una autoridad central.

Artículo 51

Información que debe facilitarse motu proprio

1. Un Estado parte podrá, con sujeción a las normas de su legislación interna, remitir sin solicitud previa a otro Estado parte la información obtenida en el curso de su investigación cuando, a su juicio, la divulgación de esa información ayude a otro Estado parte a iniciar o llevar a cabo investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos u otros actos ilícitos tipificados con arreglo a la presente Convención o pueda dar lugar a una solicitud de cooperación de ese Estado parte en virtud de las disposiciones del presente capítulo.
2. Antes de facilitar dicha información, el Estado parte que la proporciona puede pedir que se mantenga confidencial o que se impongan determinadas condiciones para su utilización. Si el Estado parte receptor no puede atender dicha solicitud, lo notificará al Estado parte suministrador, el cual determinará si, a pesar de ello, facilita dicha información. Si el Estado parte receptor acepta la información bajo determinadas condiciones, éstas serán vinculantes para él.

Artículo 52

Procedimientos para las solicitudes de asistencia jurídica mutua en ausencia de tratados internacionales aplicables

1. En caso de que no exista un tratado de asistencia jurídica mutua en vigor entre el Estado parte requirente y el Estado parte requerido, se aplicarán las disposiciones de los párrafos 2 a 8 del presente artículo. De existir un tratado de ese tipo, las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a menos que los Estados parte interesados acuerden aplicar en su lugar alguna o todas las disposiciones siguientes del presente artículo.
2.
 - a) Cada Estado parte designará una autoridad o autoridades centrales que transmitirán y responderán a las solicitudes de asistencia jurídica mutua, organizarán la ejecución de dichas solicitudes o las transmitirán a las autoridades competentes para ejecutarlas;
 - b) Las autoridades centrales u otros organismos mencionados en el párrafo a) interactuarán directamente entre sí;
 - c) Cada Estado parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas los nombres y direcciones de las autoridades designadas de conformidad con el presente párrafo;
 - d) El Secretario General de las Naciones Unidas llevará y mantendrá al día un registro de las autoridades centrales designadas por los Estados parte. Cada Estado parte velará por que este registro se mantenga actualizado.
3. Al ejecutar una solicitud de asistencia jurídica, las autoridades del Estado parte requerido aplicarán su propia legislación. A petición de la autoridad requirente, podrán aplicarse las normas procesales del Estado parte requirente si no son contrarias a los principios básicos del ordenamiento jurídico del Estado parte requerido.
4. El Estado parte requerido puede denegar la asistencia jurídica si:
 - a) La solicitud se refiere a un delito considerado por el Estado parte requerido como un delito o como un delito relacionado con un delito contra el Estado;

b) Considera que la ejecución de la solicitud perjudicaría su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales.

5. El Estado parte requerido podrá aplazar la tramitación de una solicitud si dicha tramitación obstaculiza las investigaciones penales o los procedimientos judiciales de sus autoridades competentes.

6. Antes de denegar o retrasar la prestación de asistencia jurídica, el Estado parte requerido, según proceda, tras consultar con el Estado parte requirente, considerará la posibilidad de acceder a la solicitud en parte o con las condiciones que considere apropiadas.

7. El Estado parte requerido informará lo antes posible al Estado parte requirente de los resultados de la ejecución de la solicitud de asistencia jurídica. Si la solicitud se deniega o se retrasa, se comunicarán los motivos de dicha denegación o retraso.

8. El Estado parte requirente podrá solicitar al Estado parte requerido que mantenga la confidencialidad del hecho y del objeto de cualquier solicitud presentada de conformidad con las disposiciones del presente capítulo, pero solo en la medida en que sea compatible con su ejecución. Si el Estado parte requerido no puede atender la solicitud de confidencialidad, lo comunicará sin demora al Estado parte requirente, que decidirá entonces si ejecuta, no obstante, la solicitud.

Artículo 53

Realización de interrogatorios y otras actuaciones por videoconferencia o conferencia telefónica

1. Las autoridades competentes de un Estado parte podrán, de común acuerdo, prestar asistencia jurídica por videoconferencia o conferencia telefónica.

2. La utilización de sistemas de videoconferencia o de conferencia telefónica se ajustará a la legislación del Estado parte requerido.

Si el Estado parte requerido no tiene acceso a los medios técnicos para celebrar una videoconferencia, el Estado parte requirente podrá proporcionar dichos medios de mutuo acuerdo.

Artículo 54

Competencias de las misiones diplomáticas y oficinas consulares

1. Los Estados parte tendrán derecho a notificar documentos a sus propios nacionales a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares.

2. Los Estados parte tendrán derecho, bajo la autoridad de sus autoridades competentes, a interrogar a sus propios nacionales a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares, incluso mediante la utilización de videoconferencias o conferencias telefónicas.

3. En los casos contemplados en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, no podrá utilizarse ningún medio de coacción o amenaza de la misma.

Artículo 55

Confidencialidad y restricciones al uso de la información

1. En ausencia de un tratado existente sobre asistencia jurídica mutua entre el Estado parte requirente y el Estado parte requerido, basado en una legislación uniforme o recíproca, se aplicarán las disposiciones del presente artículo. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán cuando exista un tratado o legislación de ese tipo, a menos que los Estados parte interesados acuerden aplicar en su lugar alguna o todas las disposiciones siguientes del presente artículo.

2. En respuesta a una solicitud, el Estado parte requerido podrá imponer las siguientes condiciones para proporcionar información o material:

a) Mantener su confidencialidad si, sin esa condición, la solicitud de asistencia jurídica mutua no pudiera ser atendida;

b) La no utilización de la información o material proporcionados para otras investigaciones o procedimientos judiciales no especificados en la solicitud.

3. Si el Estado parte requirente no cumple una de las condiciones mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo, informará sin demora a otro Estado parte, que decidirá entonces si puede facilitarse la información. Si el Estado parte requirente acepta cumplir dichas condiciones, éstas serán vinculantes para él.

4. Todo Estado parte que proporcione información o material sujeto a las condiciones mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo podrá, en lo que respecta a una de las condiciones, solicitar aclaraciones a otro Estado parte sobre la utilización que se haga de la información o material así proporcionados.

Artículo 56

Protección de datos personales

1. Los datos personales transmitidos de un Estado parte a otro Estado parte en virtud de una solicitud formulada de conformidad con la presente Convención solo podrán ser utilizados por el Estado parte al que se transmitan los datos a efectos de procedimientos penales, administrativos o civiles u otros procedimientos judiciales o administrativos directamente relacionados con dichos procedimientos, y para prevenir una amenaza inmediata y grave para la seguridad pública y para las personas cuyos datos personales se transmitan.

2. Dichos datos personales no se comunicarán a terceros sin el consentimiento previo por escrito del Estado parte desde el que se han comunicado los datos o del interesado.

3. Un Estado parte que transmita datos personales en virtud de una solicitud formulada con arreglo a la presente Convención podrá exigir al Estado parte al que se hayan transmitido los datos que facilite información sobre su utilización.

Artículo 57

Transferencia de procedimientos penales

Los Estados parte considerarán la posibilidad de remitirse mutuamente los procedimientos para el enjuiciamiento de un delito contemplado en la presente Convención en los casos en que se considere que dicha remisión redundará en interés de la correcta administración de justicia, en particular en los casos en que intervienen varias jurisdicciones, con miras a consolidar el enjuiciamiento.

Artículo 58

Traslado de personas condenadas

Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos sobre el traslado de personas condenadas a penas de prisión u otras formas de privación de libertad por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, a fin de que dichas personas puedan cumplir sus condenas en el territorio de esos Estados parte.

Artículo 59

Aseguramiento expedito de la información en formato electrónico

1. Cualquier Estado parte podrá solicitar a otro Estado parte que dé instrucciones o adopte otras medidas para salvaguardar sin demora la información almacenada o procesada mediante la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el territorio de ese Estado parte respecto del cual el Estado parte requirente tiene la intención, en el marco de la asistencia jurídica mutua, de solicitar el registro, la incautación u otro tipo de salvaguardia o recepción de dicha información.
2. La solicitud de salvaguardia de la información presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo deberá especificar:
 - a) El nombre de la autoridad requirente;
 - b) Un resumen de los hechos básicos, la naturaleza de la investigación, el proceso o el procedimiento judicial a que se refiere la solicitud;
 - c) La información en formato electrónico que debe conservarse y su relación con el delito o la infracción por la que se solicita;
 - d) Cualquier información disponible que identifique al propietario de la información o la ubicación del dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones;
 - e) Justificación de la necesidad de salvaguardar la información;
 - f) Una comunicación de que ese Estado parte tiene la intención, en el marco de la asistencia jurídica mutua, de presentar una solicitud de registro, incautación u otro tipo de conservación de esa información.
3. Cuando reciba una solicitud de ese tipo de otro Estado parte, el Estado parte requerido adoptará las medidas apropiadas, de conformidad con su legislación interna, para salvaguardar sin demora la información a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo. El Estado parte requerido podrá ejecutar la totalidad o parte de la solicitud de conservación de la información aunque la conducta que da lugar a la solicitud no sea un delito en el Estado parte requerido.
4. Una solicitud de salvaguardia de información puede ser rechazada si el Estado parte requerido considera que su soberanía, seguridad u otros intereses esenciales puedan verse comprometidos por la ejecución de dicha solicitud.
5. Si el Estado parte requerido considera que el cumplimiento de la solicitud mencionada en el párrafo 1 del presente artículo ya no preservaría la información, pondría en peligro la confidencialidad o interferiría de otro modo en una investigación, un proceso o un procedimiento judicial en curso, lo notificará sin demora al Estado parte requirente. Sobre la base de dicha notificación, el Estado parte requirente decidirá si ejecuta la solicitud.
6. Toda salvaguardia de información realizada en ejecución de una solicitud mencionada en el párrafo 1 del presente artículo será por un período no inferior a 90 días para permitir que el Estado parte requirente presente una solicitud de búsqueda, incautación u otra salvaguardia de dicha información. Una vez recibida la solicitud, el Estado parte requerido conservará la información hasta que se haya adoptado una decisión sobre la misma.

Artículo 60**Suministro expedito de parámetros técnicos del tráfico almacenados**

1. Si, en el curso de la ejecución de una solicitud de conservación de información con arreglo al artículo 59 de la presente Convención, el Estado parte requerido tiene conocimiento de que un proveedor de servicios de otro Estado participa en la transmisión, revelará sin demora, de conformidad con la legislación nacional, al Estado parte requirente los parámetros técnicos del tráfico en una medida que permita la identificación del proveedor de servicios y la identificación de la ruta de transmisión de la información cuya conservación se solicita.

2. Una solicitud de salvaguardia de información puede ser rechazada si el Estado parte requerido considera que su soberanía, seguridad u otros intereses esenciales se verían perjudicados por la ejecución de dicha solicitud.

Artículo 61**Ayuda mutua para la recopilación de parámetros técnicos del tráfico en tiempo real**

1. Un Estado parte, a petición de otro Estado parte, recopilará parámetros técnicos del tráfico en tiempo real en su territorio o en el territorio bajo su jurisdicción y, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional, transmitirá posteriormente la información recopilada al Estado parte requirente, si procede.

2. La solicitud presentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo deberá especificar:

- a) El nombre de la autoridad requirente;
- b) Un resumen de los hechos básicos, la naturaleza de la investigación, el proceso o el procedimiento judicial a que se refiere la solicitud;
- c) La información en formato electrónico sobre los parámetros técnicos del tráfico que deberá recopilarse y su conexión con un delito u otro acto ilícito;
- d) Cualquier información disponible que identifique al propietario o usuario de la información o la ubicación del dispositivo de tecnologías de la información y las comunicaciones;
- e) La justificación de la necesidad de recopilar los parámetros técnicos del tráfico;
- f) La justificación del período especificado para la recopilación de parámetros técnicos del tráfico;
- g) El período de recopilación de los parámetros técnicos del tráfico.

Artículo 62**Asistencia mutua en la recopilación de información por vía electrónica**

Un Estado parte recopilará en su territorio o en el territorio bajo su jurisdicción, en tiempo real, la información registrada en formato digital y electrónico transmitida por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidos los datos sobre el contenido de las comunicaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos por su legislación interna. El suministro de dicha información a otro Estado parte se hará de conformidad con la legislación interna del Estado parte que recabe la información, así como con los tratados de asistencia jurídica mutua existentes.

Artículo 63

Investigaciones conjuntas

Por acuerdo mutuo, las autoridades competentes de dos o más Estados parte podrán crear equipos conjuntos de investigación con un propósito específico y por un período limitado, que podrá prorrogarse por acuerdo mutuo, para realizar investigaciones penales en uno o varios de los Estados parte que hayan creado el equipo. Para ello, los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales. La composición de la unidad se definirá en el acuerdo.

La solicitud de creación de un equipo conjunto de investigación puede provenir de cualquier Estado parte interesado. El equipo se establecerá en uno de los Estados parte donde se vaya a realizar la investigación.

Los Estados parte se asegurarán de que se respete plenamente la soberanía del Estado parte en cuyo territorio vaya a tener lugar dicha investigación.

Artículo 64

Técnicas especiales de investigación

1. Para combatir eficazmente los delitos relacionados con la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cada Estado parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su legislación interna y con sujeción a las condiciones prescritas por la ley, adoptará las medidas que sean necesarias, hasta donde lo permitan sus posibilidades, para asegurar que se haga un uso apropiado por parte de sus autoridades competentes de la entrega vigilada y otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otro tipo y las operaciones encubiertas, por parte de sus autoridades competentes en su territorio, así como para asegurar que las pruebas obtenidas mediante dichos métodos sean aceptables ante los tribunales.

2. A los efectos de la investigación de los delitos comprendidos en la presente Convención, se alentará a los Estados parte a concertar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados, según proceda, para la utilización de esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación internacional. Dichos acuerdos o arreglos se celebrarán y aplicarán respetando plenamente el principio de igualdad soberana de los Estados y se llevarán a cabo respetando estrictamente los términos de dichos acuerdos o arreglos.

3. En ausencia de un acuerdo o convenio como el establecido en el párrafo 2 del presente artículo, las decisiones relativas a la utilización de dichas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptarán caso por caso y podrán, si es necesario, tener en cuenta los acuerdos y entendimientos financieros con respecto al ejercicio de la jurisdicción por parte de los Estados parte interesados.

Artículo 65

Cooperación policial

1. Los Estados parte cooperarán estrechamente entre sí, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, para aumentar la eficacia de las medidas de aplicación de la ley destinadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. Los Estados parte adoptarán, en particular, medidas eficaces destinadas a:

a) Reforzar o, cuando sea necesario, establecer canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes para garantizar el intercambio seguro y rápido de información relativa a todos los aspectos de los delitos

contemplados en la presente Convención, incluidos, si los Estados parte interesados lo consideran oportuno, los vínculos con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados parte en la realización de investigaciones respecto a los delitos contemplados en la presente Convención con el fin de su detección:

i) Establecer la identidad, el paradero y las actividades de las personas sospechosas de estar implicadas en dichos delitos o el paradero de otras personas implicadas;

ii) Establecer el movimiento del producto del delito o de los bienes derivados de la comisión de dichos delitos;

iii) Establecer el movimiento de bienes, instrumentos, equipos u otros medios utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de dichos delitos;

c) Efectuar la transferencia de objetos que hayan sido utilizados en la comisión de delitos, incluidos los instrumentos del delito; los objetos adquiridos como resultado de los delitos o como recompensa por ellos, o los objetos que el delincuente haya recibido a cambio de objetos así adquiridos; y los objetos que puedan tener valor de prueba en un caso penal;

d) Intercambiar, cuando proceda, con otros Estados parte información sobre los medios y métodos específicos utilizados para cometer los delitos contemplados en la presente Convención, incluidas las muestras de programas informáticos maliciosos, la utilización de identidades falsas, de documentos falsos, alterados o falsificados y de otros medios para ocultar actividades ilícitas;

e) Facilitar la coordinación efectiva entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y fomentar el intercambio de personal y otros expertos, incluido, con sujeción a los acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados parte interesados, el envío de funcionarios de enlace;

f) Facilitar el intercambio de información de interés y la actuación coordinada para la pronta identificación de los delitos contemplados en la presente Convención.

2. A fin de dar efecto a la presente Convención, los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre cooperación directa entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando esos acuerdos o arreglos ya existan, los mejorarán. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados parte interesados, los Estados parte podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados parte harán pleno uso de los acuerdos o arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, para fortalecer la cooperación entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Cada Estado parte podrá, en situaciones urgentes, enviar solicitudes de asistencia o comunicaciones relacionadas con dichas solicitudes por medios expeditos, incluido el fax o el correo electrónico, en la medida en que dichos medios garanticen niveles adecuados de seguridad y autenticación (incluido, si es necesario, la utilización de encriptación), seguidos de una confirmación formal, si así lo requiere el Estado parte requerido. El Estado parte requerido aceptará dicha solicitud y responderá a ella por cualquier medio de comunicación expedito similar. El Estado parte requerido podrá reservarse el derecho de respuesta tras la recepción de la solicitud original y lo notificará al Depositario.

Artículo 66**Red 24/7**

1. Cada Estado parte designará un punto de contacto 24 horas al día, 7 días a la semana, para prestar pronta asistencia en las investigaciones, los procesos o los procedimientos judiciales relacionados con los delitos en los que intervengan sistemas y datos informáticos, o en la recopilación de pruebas en formato digital electrónico relativas a los delitos. Dicha asistencia incluirá el apoyo a la aplicación o, cuando lo permita la legislación o la práctica nacional, la aplicación directa de las siguientes medidas:

- a) Proporcionar asesoramiento técnico;
- b) Garantizar la seguridad de los datos para la obtención de pruebas y el posterior suministro de información, de conformidad con su legislación interna y con los tratados de asistencia jurídica mutua en vigor.

2. Cada Estado parte adoptará medidas para proporcionar personal y equipos cualificados a fin de facilitar el funcionamiento de dicha red.

Sección 2**Recuperación de activos****Artículo 67****Disposiciones generales**

Los Estados parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia jurídica mutua para recuperar el producto del delito de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con la legislación interna, teniendo en cuenta las iniciativas pertinentes de las organizaciones internacionales, regionales e interregionales contra el blanqueo de dinero.

Artículo 68**Prevención y detección de las transferencias del producto del delito**

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para permitir, de conformidad con su legislación interna, que las instituciones financieras y las entidades que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital sobre las que tengan jurisdicción obtengan información sobre la identidad de los clientes y beneficiarios finales respecto de los cuales haya información sobre su posible participación o la de sus familiares o asociados cercanos o personas que actúen en su nombre en la comisión de los delitos tipificados como tales en la presente Convención, incluida información sobre las cuentas de todas las personas mencionadas.

2. Los Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para permitir, de conformidad con la legislación interna, que las instituciones financieras, así como las entidades que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, adopten medidas de control razonables sobre las cuentas solicitadas o mantenidas por las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

3. Las medidas a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo estarán razonablemente diseñadas para detectar transacciones sospechosas con el fin de informar a las autoridades competentes y no deberán interpretarse como un impedimento o una prohibición para que las instituciones financieras, así como las entidades que realizan actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital, hagan negocios con cualquier cliente legítimo.

4. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, cada Estado parte notificará, según proceda, a las instituciones financieras, así como a las entidades dedicadas a actividades relacionadas con el tráfico de activos financieros digitales y de moneda digital sobre las que tenga jurisdicción, a petición de otro Estado parte o por iniciativa propia, la identidad de determinadas personas o entidades con respecto a cuyas cuentas se espera que dichas instituciones y entidades apliquen un escrutinio más riguroso, además de las personas que las instituciones financieras, así como las organizaciones dedicadas a las actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital, puedan identificar de otra manera.

5. Cada Estado parte aplicará medidas para garantizar que sus instituciones financieras, así como las entidades que realicen actividades que impliquen la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, mantengan, durante un período de tiempo adecuado, registros apropiados de las cuentas y transacciones en las que participen las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, que incluirán, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario efectivo.

6. A fin de prevenir y detectar las transferencias del producto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado parte adoptará medidas apropiadas y eficaces para impedir, por conducto de sus autoridades de reglamentación y supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia física y que no estén afiliados a un grupo financiero regulado. Además, los Estados parte considerarán la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras, así como a las entidades que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital, que se nieguen a entablar o mantener relaciones de corresponsalía bancaria con dichas instituciones y que sean cautelosos a la hora de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan la utilización de cuentas en ellas por parte de bancos que no tengan presencia física y que no estén afiliados a un grupo financiero regulado.

7. Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su legislación interna, sistemas eficaces para la divulgación de información financiera relativa a las personas que hayan sido denunciadas como posibles implicadas en la comisión de los delitos enunciados en la presente Convención y preverá sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. Cada Estado parte considerará también la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes intercambien esa información con las autoridades competentes de otros Estados parte cuando sea necesario para investigar y adoptar medidas a fin de recuperar el producto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 69

Medidas para la recuperación directa de los bienes

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias, de conformidad con su legislación interna, para:

a) Permitir a otro Estado parte, a sus nacionales y a los apátridas que residan permanentemente en su territorio y a las personas jurídicas establecidas o que tengan un establecimiento permanente en su territorio, entablar acciones civiles ante los tribunales de ese Estado parte para hacer valer un derecho de propiedad infringido por la comisión de un delito o de otra infracción establecida de conformidad con la presente Convención;

b) Permitir que sus tribunales ordenen el pago de indemnizaciones o daños y perjuicios por los daños causados por la comisión de dichos delitos y otros actos ilícitos establecidos de conformidad con la presente Convención; y

c) Permitir que sus tribunales o autoridades competentes, al dictar sentencias de decomiso, reconozcan total o parcialmente las reclamaciones de otro Estado parte, de sus nacionales y de los apátridas que residan permanentemente en su territorio y de las personas jurídicas establecidas o que tengan un establecimiento permanente en su territorio, como legítimo propietario de los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito u otra infracción tipificada con arreglo a la presente Convención.

Artículo 70

Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional en materia de decomiso

1. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia jurídica mutua con respecto a los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o a los instrumentos de ese delito, deberá, de conformidad con su legislación interna:

a) Adoptar las medidas necesarias para que sus autoridades competentes puedan hacer efectivas las órdenes de decomiso emitidas por los tribunales de otro Estado parte;

b) Adoptar las medidas que sean necesarias, dentro de su jurisdicción, para que sus autoridades competentes puedan incautar bienes de origen extranjero en caso de condena por delitos de blanqueo de capitales establecidos de conformidad con las disposiciones de la presente Convención;

c) Considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso sin condena de dichos bienes en los procesos penales en los que el delincuente no pueda ser procesado por causa de muerte, acogida o ausencia o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado parte, a petición de otro Estado parte, deberá, a los efectos de la asistencia jurídica mutua, de conformidad con su legislación interna:

a) Adoptar las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades competentes incautar bienes en cumplimiento de una orden de incautación dictada por un tribunal u otra autoridad competente del Estado parte requirente que exponga motivos razonables que permitan al Estado parte requerido creer que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que los bienes serían eventualmente objeto de una orden de decomiso a los efectos del párrafo 1 a) del presente artículo;

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades competentes la incautación de los bienes que se le soliciten y que constituyan una base razonable para que el Estado parte requerido considere que existen motivos suficientes para adoptar tales medidas y que los bienes serían eventualmente objeto de una orden de decomiso a los efectos del párrafo 1 a) del presente artículo;

c) Considerar la posibilidad de adoptar medidas adicionales para que sus autoridades competentes puedan retener los bienes a efectos de su confiscación; por ejemplo, sobre la base de una orden de incautación extranjera o de cargos penales relacionados con la adquisición de dichos bienes.

3. La prestación de la asistencia jurídica en virtud del párrafo 2 del presente artículo se efectuará sobre la base de una solicitud escrita a tal efecto.

4. Si hay alguna duda sobre la autenticidad o el contenido de una solicitud, se puede pedir una confirmación adicional.

5. La solicitud debe contener la siguiente información:

- a) El nombre de la autoridad competente que solicita la asistencia y la autoridad competente requerida;
- b) Una exposición del fondo del asunto;
- c) Una indicación del objetivo y la justificación de la solicitud;
- d) Una descripción del contenido de la asistencia solicitada;
- e) Una copia de la orden de incautación, si está disponible;
- f) Cualquier otra información que pueda ser útil para la correcta ejecución de la solicitud.

6. La solicitud transmitida o reconocida por escrito deberá ser firmada por un funcionario autorizado de la autoridad competente requirente y certificada con el sello de dicha autoridad.

Artículo 71

Cooperación internacional con fines de confiscación

1. Todo Estado parte que haya recibido una solicitud de otro Estado parte que tenga jurisdicción sobre un delito tipificado con arreglo a la presente Convención para el decomiso de los bienes a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 73 de la presente Convención derivados de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de los medios para cometer esos delitos situados en su territorio deberá, en la medida en que lo permita su legislación interna:

- a) Transmitir la solicitud a sus autoridades competentes con el fin de obtener una orden de confiscación y, si se concede dicha orden, hacerla efectiva; o
- b) Transmitir a sus autoridades competentes, con el fin de darle efecto en la medida indicada en la solicitud y en la medida en que se refiera a bienes situados en el territorio del Estado parte requerido derivados de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de los medios para cometer dichos delitos, una orden de decomiso dictada por un tribunal del territorio del Estado parte requirente.

2. Al recibir una solicitud de otro Estado parte que tenga jurisdicción sobre un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado parte requerido adoptará medidas para identificar o incautar los bienes derivados de la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o los instrumentos de los delitos mencionados en el párrafo 1 b) del presente artículo, con miras a su eventual decomiso, que decidirá el Estado parte requirente o al que se procederá en virtud de una solicitud de ese Estado parte con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

3. Las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo serán adoptadas por el Estado parte requerido de conformidad con las disposiciones de su legislación interna y con los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales a que pueda estar obligado en relación con el Estado parte requirente.

4. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas copias de sus leyes y reglamentos que den efecto al presente artículo y de cualquier modificación posterior de dichas leyes y reglamentos o una descripción de los mismos.

5. Una solicitud presentada de conformidad con el presente artículo podrá ser denegada o las medidas cautelares podrán ser levantadas si el Estado parte requerido no obtiene oportunamente una decisión de la autoridad competente del Estado parte

requiriente o los documentos necesarios para que la autoridad competente del Estado parte requerido adopte dicha decisión.

6. Antes de levantar cualquier medida cautelar adoptada en virtud del presente artículo, el Estado parte requerido dará, siempre que sea posible, al Estado parte requiriente la oportunidad de exponer las razones que justifican el mantenimiento de la medida.

7. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 72

Cooperación especial

Sin perjuicio de su legislación interna, cada Estado parte procurará adoptar medidas que le permitan, de manera proactiva y sin perjuicio de las investigaciones o procedimientos penales que se lleven a cabo ante sus autoridades competentes, transmitir a otro Estado parte información sobre los bienes derivados de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando considere que la divulgación de esa información podría dar lugar a investigaciones o actuaciones judiciales por parte de las autoridades competentes del Estado parte receptor o a una solicitud de ese Estado parte en virtud del presente capítulo.

Artículo 73

Recuperación y eliminación de bienes robados

1. El Estado parte que haya decomisado bienes de conformidad con las disposiciones del presente capítulo dispondrá de ellos, incluida la devolución de esos bienes a sus legítimos propietarios anteriores, de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo y con su legislación interna.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan restituir los bienes decomisados cuando actúen en respuesta a una solicitud presentada por otro Estado parte de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con su legislación interna.

3. De conformidad con el artículo 71 de la presente Convención y los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado parte requerido deberá:

a) En el caso de robo de bienes públicos, si el decomiso se realizó de conformidad con el artículo 68 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme en el Estado parte requiriente, requisito al que puede renunciar el Estado parte requerido, devolver los bienes decomisados al Estado parte requiriente;

b) En todos los demás casos, considerar prioritariamente la devolución de los bienes confiscados a sus legítimos propietarios anteriores o el pago de indemnizaciones o daños a las víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados parte decidan otra cosa, el Estado parte requerido podrá deducir los gastos razonables en que se haya incurrido en la investigación o el procedimiento que haya conducido a la devolución o disposición de los bienes decomisados con arreglo al presente artículo.

5. Con el fin de llegar a acuerdos mutuamente aceptables para la disposición final de los bienes confiscados, los Estados parte pueden consultar y concluir acuerdos separados.

Artículo 74**Gastos**

Los gastos ordinarios de ejecución de una solicitud serán sufragados por el Estado parte requerido, salvo que los Estados parte interesados acuerden otra cosa. Si la ejecución de la solicitud requiere gastos sustanciales o extraordinarios, los Estados parte se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se ejecutará la solicitud y la forma en que se sufragarán los gastos.

Capítulo V**Asistencia técnica y formación****Artículo 75****Principios generales de la asistencia técnica**

1. Los Estados parte, según sus capacidades, considerarán la posibilidad de prestarse mutuamente una amplia asistencia técnica, en particular en beneficio de los países en desarrollo, en relación con sus respectivos planes y programas de lucha contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la formación en los ámbitos mencionados en el artículo 76 de la presente Convención, así como la formación y la asistencia y el intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados pertinentes, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados parte en materia de extradición y asistencia jurídica mutua.
2. Los Estados parte intensificarán, en la medida de lo necesario y de lo posible, los esfuerzos para maximizar la eficacia de las actividades prácticas y de formación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
3. Los Estados parte considerarán la posibilidad de ayudarse mutuamente, previa solicitud, a realizar evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, las causas y las consecuencias de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus respectivos países, a fin de elaborar estrategias y planes de acción, con la participación de las autoridades competentes, la sociedad y el sector privado, para combatir esos tipos de delitos.
4. Los Estados parte solicitarán a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que preste la asistencia técnica pertinente a los Estados parte para facilitar la ejecución de programas y proyectos de lucha contra los delitos y otras infracciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 76**Formación**

1. Cada Estado parte desarrollará, aplicará o mejorará, en la medida necesaria, programas de formación específicos para su personal encargado de prevenir y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos programas de formación pueden abarcar, entre otras, las siguientes esferas:
 - a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluidos métodos electrónicos de reunión y utilización de pruebas y técnicas de investigación electrónicas;

- b) Creación de capacidades para la elaboración y planificación de políticas estratégicas para combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
- c) Formación de las autoridades competentes en la redacción de solicitudes de extradición, asistencia jurídica mutua y asistencia para la aplicación de la ley que satisfagan los requisitos de la presente Convención;
- d) Prevención de la transferencia del producto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como recuperación de dicho producto;
- e) Detección y suspensión de la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
- f) Vigilancia del movimiento del producto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de los métodos utilizados para la transferencia, ocultación o encubrimiento de dicho producto;
- g) Mecanismos y métodos jurídicos y administrativos apropiados y eficaces para facilitar la incautación y el decomiso del producto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;
- h) Métodos utilizados en la protección de víctimas y testigos que cooperen con las autoridades judiciales y policiales; y
- i) Formación del personal en materia de reglamentos nacionales e internacionales y formación lingüística.

2. Los Estados parte, con la asistencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de otras organizaciones internacionales, podrán impartir formación a los Estados parte para facilitar la ejecución de programas y proyectos nacionales de lucha contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 77

Intercambio de información

1. Cada Estado parte considerará la posibilidad de realizar, en consulta con expertos, un análisis de las tendencias de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones en su territorio y de las circunstancias en que esos delitos se producen.
2. Los Estados parte, con el fin de elaborar, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, considerarán la posibilidad de difundir datos estadísticos y conocimientos analíticos sobre los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluso sobre las mejores prácticas para prevenir y combatir dichos delitos y compartirán dichos datos entre ellos y a través de organizaciones internacionales y regionales.
3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de supervisar, según proceda, sus políticas y prácticas para combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y evaluar su eficacia.

Capítulo VI

Mecanismos de aplicación de la Convención

Artículo 78

Conferencia de los Estados parte en la Convención

1. Se establece una Conferencia de los Estados parte en la Convención para mejorar la capacidad de los Estados parte y la cooperación entre ellos a fin lograr los objetivos establecidos en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. A partir de entonces, los períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia se celebrarán de acuerdo con el reglamento aprobado por la Conferencia de los Estados parte.
3. La Conferencia de los Estados parte adoptará el reglamento y las normas que rigen la realización de las actividades especificadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y participación de observadores y al pago de los gastos ocasionados por la realización de dichas actividades.
4. La Conferencia de los Estados parte acordará las actividades, los procedimientos y los métodos de trabajo para alcanzar los objetivos establecidos en el párrafo 1 del presente artículo, entre otros:
 - a) Facilitar las actividades de los Estados parte con arreglo a los artículos 76 a 77 y los capítulos II a VI de la presente Convención, incluso fomentando la movilización de contribuciones voluntarias;
 - b) Facilitar el intercambio de información entre los Estados parte sobre las pautas y tendencias de los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sobre los métodos exitosos de prevención y lucha contra dichos delitos, con excepción de la información que constituya un secreto de Estado con arreglo a la legislación de un Estado parte, así como sobre la recuperación del producto del delito;
 - c) Cooperar con las organizaciones y mecanismos internacionales y regionales pertinentes y con las organizaciones no gubernamentales internacionales;
 - d) Utilizar adecuadamente la información pertinente producida por otros mecanismos internacionales y regionales para prevenir y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a fin de evitar la duplicación innecesaria del trabajo;
 - e) Examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención por los Estados parte en la Convención;
 - f) Formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación;
 - g) Determinar las necesidades de asistencia técnica de los Estados parte para la aplicación de la presente Convención y recomendar las medidas que considere necesarias a ese respecto.
5. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados parte adquirirá el conocimiento necesario de las medidas adoptadas por los Estados parte para aplicar la presente Convención y de las dificultades con que hayan tropezado al hacerlo, mediante la información que estos proporcionen y a

través de los mecanismos complementarios de examen que establezca la Conferencia de los Estados parte.

6. Cada Estado parte proporcionará a la Conferencia de los Estados parte información sobre las medidas legislativas y administrativas y de otra índole, así como sobre sus programas, planes y prácticas, para dar efecto a la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados parte. La Conferencia de los Estados parte estudiará la mejor manera de obtener dicha información y adoptará decisiones basadas en ella, incluyendo, entre otras cosas, la información obtenida de los Estados parte y de las organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones internacionales no gubernamentales apropiadas, debidamente acreditadas de acuerdo con los procedimientos que se determinen por decisión de la Conferencia de los Estados parte.

7. De conformidad con los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados parte establecerá, si lo considera necesario, cualquier mecanismo u órgano apropiado para contribuir a la aplicación efectiva de la Convención.

Artículo 79

Comisión Técnica Internacional

1. La Conferencia de los Estados parte, con el fin de asistir a los Estados en el examen de la aplicación de la Convención, creará y establecerá una comisión técnica internacional sobre la lucha contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

2. La comisión será un órgano permanente compuesto por 23 miembros y se constituirá atendiendo a los principios de representación conjunta: dos tercios de sus miembros representarán a la Conferencia de los Estados parte y un tercio a los órganos de gobierno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

3. Los miembros de la comisión serán expertos con experiencia directa y significativa en asuntos relacionados con la diplomacia, el derecho internacional y penal, las tecnologías de las comunicaciones o las investigaciones pertinentes.

4. Los miembros de la comisión ejercerán sus funciones por un período de cinco años y podrán ser reelegidos.

5. Las reuniones de la comisión se convocarán al menos una vez al año en la sede de la UIT o de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o en los lugares y fechas que designe o apruebe la Conferencia de los Estados parte.

6. La comisión elaborará su propio reglamento, sujeto a la aprobación de la Conferencia de los Estados parte.

7. La comisión evaluará los progresos técnicos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

8. La comisión, por conducto de la Conferencia de los Estados parte, informará de los resultados de su trabajo a los Estados parte y a las organizaciones internacionales interesadas.

Artículo 80

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará los servicios de secretaría necesarios para la Conferencia de los Estados parte en la Convención.

2. La Secretaría deberá:

- a) Ocuparse de los preparativos de las sesiones de la Conferencia de los Estados parte y de la comisión técnica internacional sobre la lucha contra los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y prestar los servicios necesarios a ese fin;
- b) Ayudar a los Estados parte que lo soliciten a proporcionar información a la Conferencia de los Estados parte y a la comisión; y
- c) Garantizar la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones y mecanismos internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VII

Disposiciones finales

Artículo 81

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, incluidas las de carácter legislativo y administrativo, de conformidad con los principios fundamentales de su legislación interna, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la presente Convención.
2. Cada Estado parte podrá adoptar medidas más estrictas que las previstas en la presente Convención para prevenir y combatir los delitos en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Artículo 82

Solución de controversias

En caso de controversia entre los Estados parte acerca de la interpretación o aplicación de la presente Convención, buscarán una solución mediante la negociación, la conciliación o el arbitraje, o por otros medios pacíficos acordados por las partes en la controversia.

Artículo 83

Firma, ratificación, aceptación y aprobación

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de organizaciones regionales de integración económica, siempre que al menos un Estado miembro de dicha organización haya firmado la presente Convención de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial se depositarán ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Toda organización regional de integración económica podrá depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial si al menos uno de sus Estados miembros ha hecho lo mismo. En ese instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial, dicha organización declarará el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dicha organización también informará al depositario de cualquier modificación pertinente en el ámbito de su competencia.

Artículo 84

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o confirmación oficial. A los efectos del presente párrafo, cualquier instrumento de ese tipo depositado por una organización regional de integración económica no se considerará adicional a los depositados por los Estados miembros de dicha organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención después de haber depositado el trigésimo instrumento de dicha acción, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado u organización haya depositado el instrumento correspondiente o en la fecha en que la presente Convención entre en vigor de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, si esta es posterior.

Artículo 85

Enmiendas

1. Una vez transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la presente Convención, todo Estado parte podrá proponer enmiendas y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará la propuesta de enmienda a los Estados parte y a la Conferencia de los Estados parte en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. La Conferencia de los Estados parte hará todo lo posible para lograr un consenso sobre cada enmienda. En caso de agotarse todos los esfuerzos de consenso y no llegarse a un acuerdo, la enmienda requerirá para su aprobación, como último recurso, una mayoría de dos tercios de los Estados parte.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en virtud del presente artículo con un número de votos igual al de sus Estados miembros. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados parte y de las organizaciones regionales de integración económica pertinentes.
4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte o de una organización regional de integración económica regional noventa días después de la fecha en que se haya depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de dicha enmienda por una mayoría de dos tercios de los votos.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados parte u organizaciones regionales de integración económica que hayan consentido en quedar vinculados por ella. Los demás Estados parte seguirán estando obligados por las disposiciones de esta Convención o por las enmiendas anteriores que hayan ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 86

Reservas

Cada Estado parte podrá, mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que hará uso del derecho a

formular una reserva en cuanto a la aplicación de la presente Convención. No se admitirán reservas a los artículos 15 a 17, 19 a 20, 22 a 26, artículo 47, párrafo 11.

Artículo 87

Revisión del Anexo

1. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas a la lista de instrumentos jurídicos internacionales que figuran en el Anexo de la presente Convención.
2. La Secretaría supervisará los nuevos instrumentos jurídicos internacionales aprobados que puedan afectar al ámbito de aplicación de la presente Convención y propondrá enmiendas al Anexo para su examen en la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados parte.
3. Las propuestas de enmienda deben referirse únicamente a los instrumentos jurídicos internacionales universales y regionales que hayan entrado en vigor y se refieran específicamente a la delincuencia internacional.
4. Los proyectos de enmienda propuestos de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo serán comunicados por el Secretario General de las Naciones Unidas a los Estados parte. Si un tercio o más del número total de Estados parte que hayan ratificado la presente Convención notifican al Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de seis meses a partir del envío del proyecto de enmienda, su objeción a la entrada en vigor de la misma, la enmienda no entrará en vigor.
5. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en virtud del presente artículo con un número de votos igual al de sus Estados miembros. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
6. En el caso de que menos de un tercio del número total de Estados parte que han ratificado la presente Convención hayan presentado sus objeciones a la entrada en vigor de la enmienda al Secretario General de las Naciones Unidas en un plazo de seis meses a partir de la fecha del proyecto de enmienda, dicha enmienda entrará en vigor para los Estados parte que no hayan objetado a ella treinta días después de la expiración del plazo de seis meses concedido para objetar.
7. En la Conferencia de los Estados parte, la enmienda será aprobada por una mayoría de dos tercios del número total de Estados parte que hayan ratificado la presente Convención. Dicha enmienda entrará en vigor para los Estados parte que hayan expresado su consentimiento a la misma treinta días después de la fecha de aprobación de la enmienda.
8. Todo Estado parte que haya objetado previamente a una enmienda puede revocar su decisión y notificar al depositario su aceptación. En ese caso, la enmienda entrará en vigor para el Estado parte en cuestión treinta días después del día siguiente al día en que haya notificado su aceptación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 88

Denuncia

1. Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. Dicha denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario General.
2. Toda organización regional de integración económica dejará de ser Parte en la presente Convención cuando todos sus Estados miembros lo hayan denunciado.

Artículo 89**Depositario y lenguas**

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será designado depositario de la presente Convención.
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infraescritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos, han firmado la presente Convención.

Anexo

1. Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes (Nueva York, 30 de marzo de 1961).
 2. Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (Tokio, 14 de septiembre de 1963).
 3. Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves (La Haya, 16 de diciembre de 1970).
 4. Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (Viena, 21 de febrero de 1971).
 5. Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos (Nueva York, 14 de diciembre de 1973).
 6. Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes (Nueva York, 17 de diciembre de 1979).
 7. Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y las Instalaciones Nucleares (Viena, 3 de marzo de 1980).
 8. Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (Roma, 10 de marzo de 1988).
 9. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 19 de diciembre de 1988).
 10. Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas con Bombas (Nueva York, 15 de diciembre de 1997).
 11. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (Nueva York, 9 de diciembre de 1999).
 12. Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear (Nueva York, 13 de abril de 2005).
-